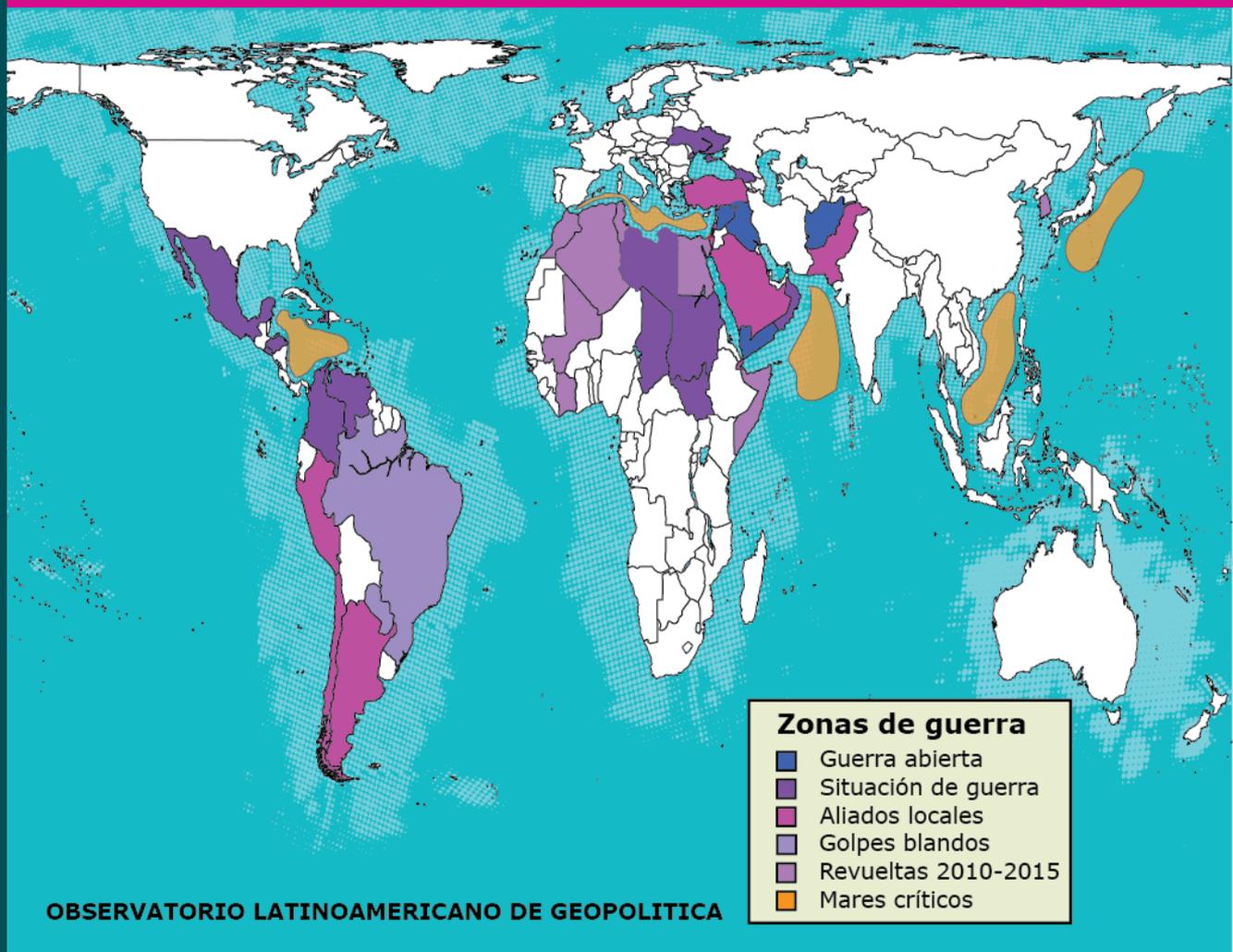


Los territorios de la guerra



527 septiembre 2017
año 41, 2ª época

Edición digital

Diseño editorial:
Verónica León

Ilustración Portada:
Mapa Zonas de Guerra,
Observatorio Latinoamericano
de Geopolítica

**Publicación internacional de
análisis y opinión de la Agencia
Latinoamericana de Información**

ISSN No. 1390-1230

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal
Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador

Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,

Of. 503, Quito-Ecuador

Tel: (593-2) 2528716 - 2505074

Fax: (593-2) 2505073

URL: <http://alainet.org>

Redacción:
info@alainet.org

Suscripciones y publicidad:
alaiadmin@alainet.org

ALAI es una agencia informativa, sin
finés de lucro, constituida en 1976
en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta
publicación pueden ser reproducidas
a condición de que se mencione
debidamente la fuente y se haga
llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artícu-
los firmados son de estricta respon-
sabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento de
ALAI.

Suscripción revista impresa
(10 números anuales)

	Individual	Institucional
Ecuador*	US\$ 34	US\$ 40
A. Latina	US\$ 60	US\$ 80
Otros países	US\$ 75	US\$ 140

* incluye IVA

Cómo suscribirse:

www.alainet.org/revista.phtml
se aceptan pagos por Internet

AMERICA LATINA *en movimiento*

Los territorios de la guerra

- 1 Los territorios de la guerra, las guerras del territorio
Ana Esther Ceceña
- 6 Disciplinamiento urbano en el siglo XXI: Tendencias regionales
David Barrios Rodríguez
- 10 Las guerras encubiertas del siglo XXI
Sandy E. Ramírez
- 14 La violencia en los tiempos del cólera
Daniel Inclán
- 17 La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales
Carlos Fazio
- 20 Las armas del autoritarismo
Raúl Ornelas
- 23 Guerra de despojo territorial y acaparamiento de tierras
Polette Rivero Villaverde
- 26 Entre la violencia y la migración: El plan que no alcanza
Rodrigo Yedra

Coedición:



OLAG



Coordinación del número: Ana Esther Ceceña
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Instituto de Investigaciones Económicas
Universidad Nacional Autónoma de México
Proyectos IN302215 e IA30121

Los territorios de la guerra, las guerras del territorio

Ana Esther Ceceña

*We are not nation-building again.
We are killing terrorists. These killers need to
know they have nowhere to hide; that no place
is beyond the reach of American might and
Americans arms.¹*
Donald Trump (21 de agosto 2017)

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial y las relaciones de poder. La relación con el territorio es tan vieja como la historia de la humanidad, pero por primera vez, con el capitalismo del siglo XXI, el territorio adquiere signos de finitud. No sólo tiene carácter de objeto -y es tratado como tal-, sino que se ha convertido en un objeto escaso.

El capitalismo no tiene más medida que la de su capacidad tecnológica, que se desarrolla incesantemente y que lo lleva a convertir la abundancia o suficiencia en escasez. Su vocación apropiadora y su dinámica acumulativa creciente producen escasez ahí donde había suficiencia, al tiempo que se sirven de la escasez como instrumento de dominación.

Es bien sabido que las riquezas de la naturaleza, particularmente aquellas indispensables para la reproducción general, tienen dos modos de ser usadas: como medios o elementos de producción o de consumo que garantizan la reproducción; o como medios de acaparamiento que hacen posible el establecimiento

de relaciones de fuerza o extorsión. En ambos casos se genera una situación relativa de escasez, sea con respecto a la competencia, sea al acaparamiento y monopolización, que otorga herramientas para la manipulación y el trazado de jerarquías de poder, que es cuidadosamente gestionada de acuerdo con modalidades diversas que se van adaptando al caso específico.

La territorialidad capitalista se juega desde sus orígenes en el territorio geográfico o físico. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, la colonización ocurre también mediante el sometimiento de costumbres y de prácticas comunitarias y corporales, y abarca tanto los territorios como los sentidos o percepciones y construcciones semióticas y culturales. Los territorios de la guerra son los de la concepción del mundo (territorio mental o semiótico), los de las modalidades y adecuaciones del ser (territorio corporal) y los del asentamiento y relación con el entorno (territorio geográfico o físico).

El territorio geográfico o físico

El territorio planetario, formado por las tierras, aguas, cascos polares y atmósfera, alberga todos los elementos que han hecho posible la vida y en los que se sustenta la reproducción material y biológica.

¹ “Ya no estamos reconstruyendo naciones. Estamos matando a terroristas. Estos asesinos necesitan saber que no tienen dónde esconderse; que ningún lugar está más allá del alcance del poder estadounidense y de las armas estadounidenses.”

Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre éstos, los hidrocarburos, los minerales y cada vez más las tierras raras ocupan el lugar central y son objeto de la mayor disputa mundial, orientando los desplazamientos geopolíticos y las guerras. Curiosamente la biodiversidad y el agua, que son las que portan de manera directa la expresión viva del planeta y por ello son absolutamente esenciales, están siendo dejadas ligeramente de lado por la voracidad con la que se desarrolla el proceso de apropiación de los otros tres elementos y por la irresponsabilidad con que se asume la degradación y extinción de la vida por los señores del capital y de la guerra. En cierta forma y de manera desafanada, la batalla por agua y biodiversidad en la Tierra pretende resolverse a través de la posible colonización de otros planetas, o de la conversión de Marte en un gran huerto para abastecer la Tierra, proyecto que permite desentenderse del daño ecológico, en gran medida irreversible, que está siendo causado principalmente por los explotadores de hidrocarburos y minerales, aunque eso no significa que no haya una enorme disputa por acaparar las fuentes de agua.

Poder y dinero van de la mano del patrón energético y disciplinario vigente que garantiza altas tasas de acumulación de capital y gran dinamismo en la esfera de la producción, por lo menos desde una perspectiva técnica, y también controlar la tecnología de guerra y su mercado. La apropiación de territorios sigue el mismo modelo: se buscan y se disputan los territorios de alta densidad estratégica, donde se colocan los capitales gigantes a manera de pulpos con poderosas mangueras de extracción y donde, generalmente, se van creando situaciones de guerra o donde se instalan decididamente guerras abiertas, ampliando el negocio de las armas.

El mapa mundial ha ido perfilando muy claramente estas tendencias en la última década en la que se reactivan guerras pasadas, se inician nuevas o se estimulan conflictos capaces de colocar los territorios en condiciones de intervención. La tercera guerra mundial, si es que la escalada bélica actual llega realmente a constituirse en tal, muestra ya indicios de un

diseño transversal que atraviesa todo el planeta siguiendo claramente la pista de los yacimientos de hidrocarburos, minerales y tierras raras (ver mapa de la portada). Es decir, esta guerra tendría lugar en el tercer mundo, fuera del terreno directo de las potencias en pugna, excepto, quizá, Rusia.

Afganistán

Es un mapa dinámico, en permanente redefinición, pero las áreas ya marcadas por la guerra no parecen restablecer condiciones de funcionamiento “democrático” en ninguno de los casos. El ejemplo de Afganistán, con una larga y devastadora guerra que parecía estar finalizando, hoy vuelve a colocarse en el foco. A pesar de las grandes pérdidas en vidas -no sólo afganas sino también estadounidenses-, el subsuelo afgano, lleno de minerales y tierras raras que los monitoreos expertos han calculado en un billón (un millón de millones) de dólares, nuevamente orienta las baterías hacia ese país.

Como punto de comparación, todo el presupuesto militar de Estados Unidos en 2016, que equivale a un poco más del de China, Arabia Saudí, Rusia, Gran Bretaña, India, Francia, Japón, Alemania y Corea juntos, fue de 597 mil millones de dólares: lejos de lo que sería su rendimiento con la explotación de los yacimientos minerales de Afganistán. Podríamos hablar de una muy alta tasa de retorno de las inversiones militares en este y casi todos los otros territorios que se ubican dentro de esa franja en situación de guerra. Pero además Afganistán se coloca como territorio prioritario por la importancia que tienen las tierras raras en la creación de nueva tecnología civil y militar.

Como en todos los otros lugares donde se ha instalado la guerra, en Afganistán son las mismas empresas las que buscan apropiarse de los yacimientos mineros y las que se ocupan de hacer la guerra mediante el mecanismo de privatización. Es el caso de DynCorp, particularmente, cuyo propietario forma parte de la

CAPACIDAD MILITAR

País	Efectivos en activo (2017)	Estimación de reservistas (2017)	Gasto en defensa 2016 (miles de millones de dólares)
Estados Unidos	1, 347, 000	865, 000	604, 452
China	2, 183, 000	510, 000	145, 039
Arabia Saudita	2,27, 000	0	56, 898
Reino Unido	152, 000	81, 000	52, 498
India	1, 395, 000	1, 155, 000	51, 052
Japón	247, 000	56, 000	47, 342
Francia	203, 000	28, 000	47, 201
Rusia	831, 000	2, 000, 000	46, 626
Alemania	177, 000	28, 000	38, 281
Corea del Sur	630, 000	4, 500, 000	33, 778

Tabla realizada a partir de la información del *Military Balance 2017. The annual assesment of global military capabilities and defense economics*, IISS, Londres, 2017, pp. 553-559.

cúpula de diseño estratégico que, junto con los altos mandos militares, están trazando las líneas de avance de la política norteamericana². Lo mismo concurren los intereses de todas las otras empresas contratistas del Pentágono y los propios laboratorios de investigación del Departamento de Defensa.

Se juega en estas guerras u ocupaciones la supremacía militar pero muchísimo más que eso. La carrera tecnológica, los mercados, las rutas de la droga o en general las rutas estratégicas tanto de hidrocarburos y armas como de cualquiera de las otras mercancías de alto rango en el mercado mundial. Afganistán nuevamente resalta en este terreno por ser la mata del opio y heroína del mundo con el 82 % de la producción mundial.

² ver <https://nyti.ms/2tXTEnE>

Si examinamos cada uno de los países o regiones que han entrado en este estado de guerra, el análisis arroja datos similares a los de Afganistán. A Estados Unidos y sus empresas les interesa la guerra pues abastecen el 55 % del mercado mundial de armas y la guerra es el medio de posicionarse en esos territorios. En conjunto, el área que ha sido colocada en esta dinámica reúne casi todos los hidrocarburos del planeta, además de otras riquezas.

Venezuela

En la otra punta de la franja de guerra se encuentra Venezuela, país con los mayores yacimientos de petróleo del mundo, segundo lugar en reservas de gas, con amplias reservas de oro, coltán y thorium, el llamado uranio verde, además de agua, biodiversidad y una

posición geoestratégica. Es difícil calcular el presupuesto invertido en la desestabilización de Venezuela. Seguramente grande pero mucho menor todavía que el de Afganistán.

En todo caso la manera de entrar en Venezuela es muy distinta a la de Afganistán, lo que revela la amplitud de modalidades de guerra que se ponen en juego cuando se trata de conservar o disputar el control estratégico del proceso general de reproducción o, dicho de otro modo, el poder global. El dato fuerte, en este caso, es que Venezuela es la posible puerta de entrada de la guerra al continente americano. Puede bien ser el Afganistán de América. La diferencia es la cohesión y conciencia social venezolana, la fuerza cultural de la sociedad, frente a la fragmentación cultural en el territorio afgano, profundizada por los largos años de guerra a los que ha sido sometido.

La perspectiva de una tercera guerra mundial, no obstante, si bien cuenta con todas

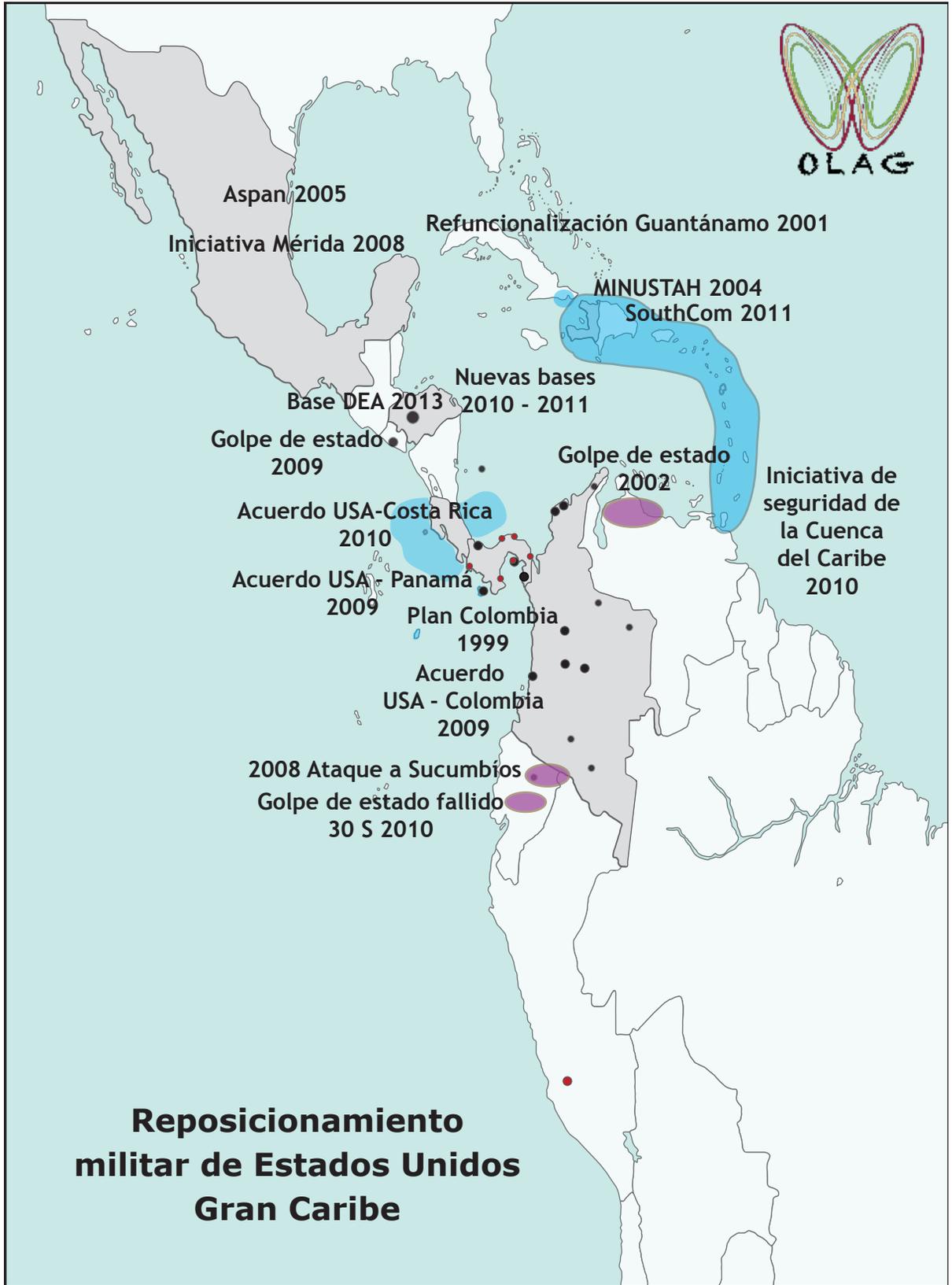
las condiciones materiales, geopolíticas y tecnológicas, no logra colocar una narrativa sustentadora. A pesar de todos los dispositivos que se han puesto en marcha para des-sujetizar a los pueblos del mundo, éstos conservan y construyen narrativas propias, a contrapelo del cuidadoso y sistemático trabajo realizado por los lineamientos generales de los programas de estudios impulsados por los organismos internacionales y por los relatos de verdad oficial o de postverdades (*fake news*) colocados por los medios de comunicación masiva.

No sólo las guerras, consustanciales al sistema capitalista de competencia, están destruyendo el planeta. También lo hace el patrón energético y el modelo de organización y relaciones sociales existente. Una buena parte de la humanidad está oponiéndose a la guerra y buscando pistas para despegarse de este sistema depredador de alta rentabilidad empresarial, de autoritarismo exacerbado y de desprecio total por la vida. <<

El Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) es un grupo de investigación dedicado al estudio de la naturaleza, contenido, dinámica y límites del sistema de dominación capitalista y de las modalidades, epistemologías y caminos de construcción de posibles organizaciones sociales alternativas.

A partir de la identificación de los nodos estratégicos de la reproducción material, simbólica y territorial del capitalismo del siglo XXI, el OLAG ha diseñado su ruta metodológica de aproximación y aprehensión de la realidad desde una perspectiva integral en la que se busca abarcar el espectro completo de relaciones, mecanismos y disyuntivas emanados de la interacción de los sujetos tanto del proceso de dominación, disputa y construcción de hegemonía como de la confrontación y bifurcación sistémica.

Tecnología, militarización, disputa territorial, producción estratégica, competencia, control y disciplinamiento social, epistemologías, visiones del mundo, cultura, enajenación, violencia, emancipación y ejercicio o desmonte del poder son algunos de los criterios que permiten al OLAG cartografiar e interpretar el proceso geopolítico contemporáneo.



Disciplinamiento urbano en el siglo XXI: Tendencias regionales

David Barrios Rodríguez

América Latina y el Caribe es el área del planeta con mayor población viviendo en ciudades, y debido a nuestro peculiar proceso de urbanización, éstas comportan una complejidad notable: el desbordado crecimiento de las concentraciones poblacionales produjo la proliferación de áreas urbanas hiperdegradadas, una boyante economía informal, así como formas vernáculas de vivienda y gestión de la vida.

Vigilar, reprimir y ordenar las ciudades es un tema viejo. Sin embargo, en los albores del siglo XXI hemos sido testigos de la conformación de distintos dispositivos de control y disciplinamiento social, en los que de manera creciente los asuntos de orden público reciben un tratamiento bélico. Dicha modificación tiene como objetivo intervenir en problemáticas diversas: el incremento de la conflictividad social, delincuencia producida por la exclusión económica y, de manera muy importante, la conversión de América Latina y el Caribe en la región productora y manufacturera de los estimulantes ilegales que sostienen al capitalismo en fase terminal y sus dolencias.

Esta región, junto con otras latitudes del Sur global, conforman el verdadero rostro urbano mundial contemporáneo y, por tanto, son los lugares donde se definirán las estrategias de disciplinamiento de nuestro siglo. Baste con-

siderar que hacia el año 2050, dos de cada tres seres humanos habitarán en ciudades, tendencia demográfica que tendrá mayor impacto en África, América y Asia (ONU, 2017).

Genealogía reciente de peligros y “antídotos”

Algunos elementos doctrinarios y formas específicas de los dispositivos de control y disciplinamiento urbanos son claves para América Latina y el Caribe. En primer lugar, pensemos en la difusión generalizada del discurso que fomenta la aplicación de políticas de “mano dura” en materia de seguridad pública o ciudadana. Dentro de estas, se contempla el incremento de condenas por la comisión de determinados delitos o la reducción de edad para la imputabilidad penal. Una vertiente más es la llamada “tolerancia cero” a delitos menores, a su vez inspirada en la teoría de las “ventanas rotas” (Kelling y Wilson, 1982) y que redundará en la criminalización de la pobreza y la juventud.

En estrecha relación con lo anterior, nuestras ciudades comparten la instrumentación y sofisticación de dispositivos antropométricos así como sistemas de vigilancia diversos. Un ejemplo de ello es la colocación de redes de videocámaras conectadas con oficinas de comando y operación en tiempo real. Esto hace parte de las reivindicaciones de las clases medias y adineradas, pero también nutre la limitada oferta de las plataformas políticas a lo largo del continente. Con ello se conforma

David Barrios Rodríguez es miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la IIEC-UNAM.

además un jugoso negocio para las empresas privadas que obtienen las concesiones para proveer la tecnología necesaria que requieren estas tareas.

Dichos sistemas de vigilancia están ahora presentes ya no sólo en las zonas consideradas criminógenas, sino también en vías de acceso y comunicación, así como en el transporte público, esparciendo con ello los objetivos de vigilancia del viejo panóptico. Además de ello, el fenómeno de privatización de la seguridad, redundando en la instauración de otros mecanismos de control sobre nuestras ciudades, desde la supervisión del espacio, hasta la imposición de normatividades y ejecución de penas, que ahora corre también por cuenta de diversos actores (milicias, traficantes, paramilitares, o compañías militares y de seguridad privada).

Todos estos elementos han producido la proliferación de políticas que pueden ser llamadas securitarias, neologismo que remite a la enunciación desde el poder para construir enemigos y amenazas sociales (Balibar, 2004). Con ello se ha logrado avanzar en una agenda represiva, lo que ha permitido la paulatina militarización de las funciones en materia de seguridad pública o ciudadana. En un primer momento, esto fue posible gracias a la demanda de “profesionalización” de los cuerpos policíacos, que redundó en una paulatina militarización de las policías.

En la actualidad son muchas las ciudades de Latinoamérica y el Caribe en que las Fuerzas Armadas son utilizadas para llevar a cabo tareas de patrullaje, en especial con el argumento de combatir al llamado “crimen organizado”. Como complemento de este proceso han sido desarrollados marcos jurídicos que incluyen leyes “antiterrorismo” o que contemplan situaciones de excepcionalidad legal. Como elemento clave del proceso, todo este complejo de discursos y prácticas suele ser utilizado para contrarrestar las distintas expresiones de disidencia e impugnación del orden de cosas imperante.

La guerra contra las poblaciones

Es con la llegada del siglo XXI que hemos asistido a una peculiar reedición de la construcción de enemigos sociales en clave de “guerra justa”. Esto ocurrió en buena medida, a partir del lanzamiento de la “Guerra contra el terror” impulsada por Estados Unidos, y que en nuestros países ha sido resemantizada/re-dirigida hacia distintas estructuras vinculadas con la economía criminal-ilegal. Sólo por hacer referencia a las áreas donde el proceso se salda con mayores índices de letalidad, pensemos en los cárteles mexicanos, las *maras* que actúan a lo largo y ancho del Triángulo Norte o en las facciones de traficantes en Brasil.

La instauración de esta guerra social hace eco en la gran doctrina militar, desde la cual existe ahora gran interés en reflexionar sobre las capacidades y estrategias para penetrar en el escenario o teatro de operaciones urbano, e incluso en aquellas gigantescas aglomeraciones conocidas como megaciudades (con más de 10 millones de habitantes). En este sentido, destaca el estudio liminar del Chief of Staff of the Army de Estados Unidos, que construye escenarios de acción incluyendo tres megaciudades latinoamericanas: Ciudad de México, São Paulo y Río de Janeiro (Megacities Concept Team, 2014).

Más allá de la patente militarización de la vida cotidiana ciudadana (simbólica, doctrinaria y material), América Latina y el Caribe ha sido el escenario de la realización de operaciones militares abiertas de gran envergadura, tendencia que, por el papel que tendrán las ciudades en las décadas siguientes, seguramente se mantendrá. En relación a ello, resultan significativas tres experiencias en las que ha tenido lugar una suerte de retroalimentación y de las cuales se hace apología como paradigmas de “pacificación” a exportar a otros países del continente. Es por ello que en cada ejemplo se pone de relieve alguna de sus características principales y que pueden servir para pensar de manera general los elementos de las formas de disciplinamiento que se abren en el horizonte:

1. En primer lugar, destaca el componente contrainsurgente de la política conocida como Seguridad Democrática, impulsada por Álvaro Uribe Vélez y que fuera lanzada en Medellín con la Operación Orión en octubre de 2002. Esta se saldó con asesinatos, desplazamiento forzado, la conversión de una parte de la Comuna 13 en una gigantesca fosa clandestina (La Escombrera) y la instalación de un poder dual en la ciudad a través de la colocación de posiciones fortificadas (Centros de Atención Inmediata periféricos), acompañada por la instauración del control paramilitar en sus comunas. El temor que proliferó a partir de entonces permitió la conformación de una cultura del miedo y la delación.
2. MINUSTAH (2004-2017) En Puerto Príncipe y sus zonas consideradas especialmente peligrosas (*Cité du Soleil*, *Cité Militaire* y *Bel Air*) desde el año 2004 fue desplegado el

Batalhão Brasileiro de Operação de Paz no Haiti (BRABATT/ MINUSTAH), el que a través de la implantación de bases militares llevó a cabo el patrullaje ostensivo de distintas áreas de la ciudad. Esta experiencia sirvió para poner a prueba la militarización de la vida cotidiana urbana como un proyecto a largo plazo, en donde se podían combinar operaciones bélicas “clásicas” con las acciones civiles o de “ayuda humanitaria”.

3. Ciclo de megaeventos en Río de Janeiro (2007-2016). En este periodo resalta la conversión de la población de las *favelas* de la ciudad en enemigo y objetivo militar. Por la escala y duración del proceso fueron utilizados todos los dispositivos antes señalados (doctrinarios, antropométricos, de vigilancia, patrullaje, militarización del espacio público). La instalación de 38 bases policiaco-militares (conocidas como Unidades de Policía Pacificadora) fue posible gracias a

HOMICIDIOS INTENCIONALES EN LOS 10 PAÍSES CON MAYOR INCIDENCIA		
País	2010	2015
Brasil	43,272	55,574
India	42,299	41623*
México	25, 557	20,762
Federación Rusa	22,897	16,232
Nigeria	16,996	17,843
Sudáfrica	15,940	18,673
Colombia	15, 013	12,782
Estados Unidos	14,722	15,696
Paquistán	13,208	13846*
República Bolivariana de Venezuela	13, 080	17,778

*Para India y Paquistán tomamos el último año disponible, 2014 y 2012 respectivamente

Fuente: Realizada a partir de la serie estadística sobre homicidios (2000-2015) de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), disponible en el enlace <https://data.unodc.org> (consultada el 01/09/ 2017).

operativos de guerra urbana en los que participaron miles de soldados, marinos, equipos de operaciones especiales, entre otras corporaciones. La ocupación militar de los complejos de favelas de Alemão (Operação Arcanjo) y Maré (Operação São Francisco) implicó el mayor despliegue por parte de las Fuerzas Armadas de ese país desde el siglo XIX, lo que resulta un signo elocuente de las transformaciones en las formas de hacer la guerra en la actualidad.

En las ciudades de América Latina y el Caribe la seguridad pública, el control de insurgencias y resistencias, así como los efectos de la exclusión de miles de personas después de décadas de neoliberalismo se integran en los objetivos militares de este siglo XXI. Es por ello que la reivindicación contra la militarización de nuestros países debe formar parte central de la agenda de los movimientos y las luchas sociales. ◀

Fuentes consultadas

Balibar, Étienne (2004), “Seguridad y resistencia a la opresión”, dentro de *Derecho de ciudad. Cultura y política en democracia*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Megacities Concept Team (2014), *Megacities and the US Army. Preparing for a complex and uncertain future*, Virginia, Chief of Staff of the Army Strategic Studies Group.

Organización de las Naciones Unidas (2017) *World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings and Advance Tables*, Nueva York, Department of Economic and Social Affairs Population Division.

Wilson, James Q. y Kelling, George (1982), “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety.” *Atlantic Monthly* no.249: 29-38.



Las guerras encubiertas del siglo XXI

Sandy E. Ramírez

*We operate and fight in every corner of the world.*¹

Raymond A. Thomas, US SOCOM

La guerra infinita es la marca de nuestros tiempos. El Departamento de Defensa estadounidense (DoD) ha sido el principal arquitecto de un escenario colmado de guerras: preventivas, contra el terrorismo, el crimen organizado o supuestos gobiernos autoritarios. Sin embargo, la lógica de estas guerras ya no consiste en hacerlas para que un bando salga victorioso sino para “mantener los territorios en *situación de guerra* porque [estas] ya no son el medio, sino el fin” (Ceceña, 2014).

El 11 de septiembre de 2001 fue el punto de inflexión en el modo de hacer la guerra. A las fuerzas convencionales, se sumó cada vez más el despliegue de los cuerpos de fuerzas especiales. Aunque su origen proviene de la guerra de Vietnam y de la creación del Comando de Operaciones Especiales (SOCOM) en 1987, fue a partir del 2001 que sus operaciones se ampliaron para abarcar el planeta entero bajo las más diversas modalidades, particularmente en la guerra contra el terrorismo. La operación más llamativa de este tipo de cuerpos militares es el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011 a manos del equipo SEAL 6 —uno de los cuerpos de élite del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC)—, al que se suman otros

como los Army Delta, Rangers, Green Berets, etcétera. Soldados altamente entrenados para actuar en tierra, mar o aire, se distinguen por su carácter reptante: actúan en pequeños grupos clandestinos, encubiertos, que operan con, o por medio, de las fuerzas militares locales, con altos niveles de riesgo (JCS, 2014: I-1). Entre sus tareas no sólo está la acción directa en medio del conflicto (con tácticas antiterroristas, de guerra no convencional o contrainsurgencia) sino las acciones diplomáticas encubiertas, el reconocimiento de los territorios, el entrenamiento de fuerzas de seguridad de otros países, y la asistencia humanitaria (JCS, 2014: II-3).

El rango de acción de estos cuerpos sobrepasa el protocolo militar y el derecho internacional, por lo que son idóneas para intervenir en guerras irregulares y asimétricas, es decir, en aquellas donde se enfrentan actores estatales y no estatales. Si se trata de un país aliado, las fuerzas especiales pueden apoyar con entrenamiento a las fuerzas militares, participar en operaciones de contrainsurgencia, antiterroristas y de estabilización para acabar con “insurgencias, resistencias o terroristas”. Cuando se trata de países hostiles, cualquier insurgencia o resistencia es apoyada con operaciones de guerra no convencional para acabar con ese estado (JCS, 2014: II-2).

1 Operamos y combatimos en cada esquina del mundo.

Sandy E. Ramírez es maestra en Economía e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. sanerag@gmail.com

Este tipo de cuerpos militares son parte central de las guerras desatadas en este inicio de siglo. Aunque estas fuerzas sólo reciben 2 por ciento del presupuesto del DoD, estos gastos han crecido aceleradamente en la última década. Entre septiembre de 2001 y 2014, los recursos que recibió el SOCOM se triplicaron (de 3 mil millones de dólares a 9.8 mmd) y el personal total alcanzó los 70 mil elementos en 2017. Según el SOCOM, actualmente hay cerca de 8 mil soldados de élite operando en más de 80 países, aunque su presencia se ha detectado en 70% de los países del mundo, principalmente en Medio Oriente (Turse, 2017).

Fuerzas especiales en América Latina

En América Latina, esta tendencia se extiende aceleradamente a través de tres mecanismos: ampliando los territorios de operación directa de los cuerpos de fuerzas especiales, aumentando el entrenamiento de las fuerzas locales y definiendo un enemigo particular: los narcotraficantes y el crimen organizado.²

A diferencia de los países del Medio Oriente, la puerta de entrada a los cuerpos de fuerzas especiales en América Latina y el Caribe no fue el terrorismo sino la guerra contra las drogas. Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que se realizó con la intervención del llamado Bloque de Búsqueda, en el que participaban elementos del JSOC y personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Ya

² En audiencia ante el Comité de servicios armados de la Cámara de representantes, el general Raymond A. Thomas señaló las cinco amenazas que son prioridad del SOCOM: las organizaciones extremistas, Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Thomas mencionó que las fuerzas especiales tienen presencia en Afganistán, Siria, Irak, Yemen, Somalia, Libia, el cinturón del Sahel, Filipinas, Centro y Sudamérica debido a la presencia de Al Qaeda y el Estado Islámico. No hay evidencia que alguno de estos grupos esté presente en América Latina, sin embargo, la amenaza que representan las “redes criminales internacionales” se equipara a la de las organizaciones calificadas como terroristas.

con la puesta en marcha del Plan Colombia, la CIA implementó un programa encubierto para eliminar a los líderes rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional, con el que se asesinó a más de 70 miembros de estas guerrillas entre 2007 y 2013. Las operaciones encubiertas incluían la prestación de servicios de inteligencia en tiempo real y paquetes de bombas inteligentes, guiadas por GPS. Ése es el tipo de bombas que se usaron en marzo de 2008, cuando las fuerzas aéreas colombianas atacaron un campamento de las FARC en Sucumbíos, en la zona fronteriza de Ecuador (Priest, 2013).

Otro de los mecanismos mediante los cuales se despliegan las fuerzas especiales a lo largo del continente es a través de entrenamientos militares bilaterales o regionales. Tres ejercicios regionales, organizados por el Comando Sur, son encabezados por los cuerpos de élite del ejército estadounidense: Fuerzas Comando, Fused Response y Panamax. Durante las competencias de los cuerpos de élite y patrullajes al canal de Panamá con escenarios de ataques terroristas simulados, las fuerzas especiales estadounidenses dan asesoría a sus contrapartes latinoamericanas. Es notable que el comando de élite colombiano haya ganado 8 de las 13 ocasiones en que se ha realizado la competencia Fuerzas Comando.

Los Entrenamientos de Intercambio Conjuntos Combinados (JCET) son otra forma de conducir las operaciones de los cuerpos de élite para reconocer territorios, familiarizarse con el lenguaje y cultura de otros países. En estos ejercicios se practican habilidades de combate urbano, comunicaciones, recolección de información y control de disturbios. En América Latina y el Caribe, este tipo de ejercicios se han triplicado a pesar de que el presupuesto militar que Estados Unidos ha destinado a la región ha disminuido. Estos intercambios se han dado prácticamente con todos los países del continente, sobresaliendo: Honduras, que recibió 21 misiones entre

JCET en América Latina, 2007-2014

País	Número
Honduras	21
Colombia	19
El Salvador	19
República Dominicana	18
Belice	16
Panamá	15
Brasil	13
Chile	11
Guyana	11
Perú	11
Jamaica	9
Trinidad y Tobago	9
Guatemala	8
Otros países*	31
Total	211

*Incluye a Paraguay, Surinam, Costa Rica, Nicaragua, México, Argentina, Bahamas y Uruguay.

Fuente: Kinoshian e Isacson, 2016

2007 y 2014, y El Salvador y Colombia con 19 (Kinoshian e Isacson, 2016). Su rango de acción es incierto. En 2017, por ejemplo, un grupo de fuerzas especiales estadounidense recibió la autorización del congreso paraguayo para ingresar al país con equipo, armamento y municiones para participar en un entrenamiento de intercambio para entrenar al ejército paraguayo en el combate al terrorismo y el narcotráfico.

El papel de las fuerzas especiales

El crecimiento de las Fuerzas especiales es uno de los pilares de la política militarista estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001. El ejército estadounidense puede librar enormes y

costosas guerras al mismo tiempo que tener desplegados pequeños grupos con capacidad de operación quirúrgica y letal. Sin embargo, el crecimiento de ISIS y la continuada batalla por Afganistán, son una muestra de que las fuerzas especiales no ganan las guerras sino que son parte fundamental de la construcción de la guerra infinita. En medio de la violencia generalizada que recorre América Latina, el crecimiento de los cuerpos militares especiales, nacionales o estadounidenses, es una pista que no debe dejar de seguirse.

Bibliografía

Ceceña, Ana Esther (2014), “Los golpes de espectro completo”, *Reordenando el continente*, ALAI, núm. 495, mayo.

Joint Chiefs of Staff (2014), *Special Operations*, Joint Chiefs of Staff, en http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_05.pdf

Kinoshian, Sarah y Adam Isacson (2016), “U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?”, *WOLA*, 30 de agosto, en <https://www.wola.org/analysis/u-s-special-operations-latin-america-parallel-diplomacy/>

Priest, Dana (2013), “Covert action in Colombia”, *The Washington Post*, 21 de diciembre, en http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2013/12/21/covert-action-in-colombia/?utm_term=.15967a57eca2

Turse, Nick (2017), “A Wide World of Winless War”, *TomDispatch*, 25 de junio, en <http://www.tomdispatch.com/blog/176300/>



La violencia en los tiempos del cólera

Daniel Inclán

*Se hizo de noche al medio día...
Una sombra no hace la noche entera
¿o sí la hace?*
Chantal Maillard, Matar a Platón

Pensar la violencia hoy

A contramano de la crítica moral de la violencia, que habla de su carácter anómalo y extraordinario, tendríamos que empezar a reconocer que la violencia en el mundo contemporáneo no es excepcional sino constitutiva de las formas de la vida social. Más aún, habría que aceptar que ha dejado de ser un medio y que se ha convertido en un fin en sí misma. Fin que define uno de los rasgos característicos de la tendencia civilizatoria del capitalismo hoy, aquella que encuentra en la barbarie la forma de socialidad ideal. La violencia se vuelve un proceso a través del cual se organiza la vida colectiva, ya que sirve como lógica comunicativa y como procedimiento pedagógico para configurar a los sujetos.

Hoy la violencia ayuda a que el control político y económico sea efectivo. Los resultados positivos del ejercicio de la violencia se verifican con mayor velocidad que los beneficios políticos o económicos de las viejas formas de control social. Son dos mecanismos complementarios que hacen esto posible: aquellos que presentan a la violencia como algo exter-

no a los sujetos y aquellos que la diseminan para hacerla interna. La violencia actúa por fuera y por dentro de los sujetos.

De ahí que necesitemos pensar las formas de la violencia de otra manera. Reducir su estudio a los actos contribuye a una confusión generalizada a través de la cual se homologa la violencia con la ira o la agresividad, ambas pasiones que concluyen en actos de fuerza cuyo fin es la destrucción simbólica o real de personas u objetos. En cambio, la violencia es un proceso por medio del cual se intenta establecer una situación y su racionalidad usando una fuerza o un conjunto de fuerzas (físicas, cognitivas, afectivas). La violencia produce un entorno material y una semántica, que sirve para legitimar el acto y construir una racionalidad, por precaria que sea. Por tanto, no hay violencias irracionales, toda violencia tiene la fuerza para generar sus razones y sus procesos de entendimiento, morales o cognitivos, aunque éstos sean frágiles o contradictorios.

La violencia produce diferencias donde no existían, al tiempo que genera los mecanismos para controlarlas. Es un proceso de cálculo, que afecta los cuerpos y las percepciones, los objetos y las interpretaciones. En la violencia no se persigue la igualdad, sino la distinción y la ruptura del sentido mediante la fuerza. La violencia reordena y establece legalidades que antes no existían. Por ello es selectiva, opera de maneras específicas, nunca es homogénea y nunca se aplica al conjunto de una población (aunque en los imaginarios de las poblaciones parezca lo contrario).

Daniel Inclán es investigador adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Responsable del proyecto PAPIIT IA301217 “Economía política de la violencia”.

La violencia actúa, pero no es ahí donde está su esencia. Está en el intento de imponer un ordenamiento (sus efectos en cuerpos, objetos y percepciones) y en la construcción de sujetos. No hay violencias universales, ni una forma genérica, sino formas de la violencia en las que se encadenan de manera particular actos, instrumentos, tiempos y espacios.

De ahí que toda la crítica de la violencia sea una crítica política, ya que siempre opera en el marco de proyectos políticos; es aquí donde se puede reconocer su especificidad, no en los actos en los que se realiza (que pueden ser prácticamente los mismos desde hace siglos). Su historicidad no está en la novedad o continuidad de ciertas prácticas, sino en la manera en la que éstas se articulan con proyectos políticos específicos, y cómo dentro de éstos se construyen sujetos.

La violencia en América Latina: poder y autoritarismo

En estas geografías se ensayan proyectos económicos y sociales en los que se ponen al límite las trayectorias del capitalismo. En este abanico de proyectos hay una variedad de formas de la violencia que intentan articular las distintas expresiones de la economía: aquellas que se despliegan bajo el amparo de las viejas instituciones liberales y sus marcos legales; y las que se despliegan construyendo nuevos órdenes institucionales, que trabajan con la fuerza de ley sin generar marcos normativos constituidos. La violencia cumple las funciones civilizatorias que hacen posible la pervivencia de distintas modalidades de acumulación, que a simple vista parecerían contrapuestas o peligrosas entre ellas; pero que en la vida diaria no sólo han podido sobrevivir juntas, sino que han generado procesos simbióticos.

La violencia cumple varias funciones. Está ahí para rediseñar territorios, para redefinir el sentido de la vida colectiva, para trabajar sobre las corporalidades que necesitan las distintas modalidades de acumulación. Ade-

más, cumple las funciones que otrora cumplía la fábrica y el consumo serializado. Acá se despliega una relación dialéctica: no es la violencia la que degrada las condiciones de existencia, también son las existencias degradadas las que producen las condiciones para la reproducción de las formas de la violencia.

La violencia, por tanto, no es exógena a las dinámicas cotidianas, no es resultado sólo de los grupos armados, estatales o paraestatales, sino que nace al interior de las comunidades. La violencia, en tanto proceso de ejercicio de poder, se disemina en el cuerpo social, no se conserva como una dinámica externa, encarna en los cuerpos y en las relaciones colectivas que la sintetizan; la violencia se hace capilar y se inscribe en las más minúsculas de las relaciones colectivas. No sólo se reproduce en los espacios públicos o en las grandes alamedas, se despliega en las pequeñas instancias, en la microfísica de la vida cotidiana. Esto no significa que sea homogénea o unívoca.

Su cotidianidad permite una cadena de procesos: aquella en la que se desarrolla el vínculo entre violencia, corrupción, complicidad e impunidad. La violencia genera condiciones de impunidad gracias a las dinámicas de corrupción y complicidad en las que se realiza. Estas no serían posibles sin una amplia base social, que si bien no participa directamente del ejercicio de la violencia, está detrás, alimentando con sueños y deseos el mundo de la violencia y los beneficios inmediatos que genera.

Acá hay que pensar en la transformación de las formas de reconocimiento social, que en los últimos lustros se han modificado radicalmente. Los viejos espacios sociales, que correspondían con una trayectoria del capitalismo vinculada al papel protector de los estados, y que encontraban en el trabajo asalariado, la educación, el éxito profesional o la astucia sus modelos ideales, han llegado a su fin. Estas formas de reconocimiento social permanecen como reminiscencias de paso perdido, pero añorado con nostalgia. En la sociedad actual

lo que mide el valor social es el rendimiento y la ganancia que produce. El poder social que se produce por participar activamente en el ejercicio de las formas de la violencia es reconocible de inmediato, no sólo por su obsesiva ostentación, también por la crueldad con la que trabajan, por su impacto inmediato. Ejercer la violencia permite ganar un espacio en una sociedad que tendencialmente expulsa a amplios sectores.

Otro factor que es importante considerar son las formas del autoritarismo social, que junto con el autoritarismo de las nuevas instituciones cierra una pinza en la que la violencia juega un papel articulador. El autoritarismo estatal articula las violencias políticas de las instituciones de seguridad con las violencias económicas de las distintas formas de acumulación; este autoritarismo sirve para garantizar la concentración de ganancias en pocas manos, disciplina a la base social y a los sectores económicos que no se alinean a las nuevas formas de economía desdoblada. Por otro lado, el autoritarismo social actualiza viejas herencias de precarización de la vida: colonialismo, racismo, machismo, un odio a los jóvenes y los viejos, etc.

El autoritarismo social se hace radical ahí donde la vida está siendo precarizada de forma reiterada, donde se interiorizan los sentidos comunes de la dominación, sin la posibilidad de exteriorizarlos, reproduciéndolos en las propias comunidades hasta hacerse enemigas de sí mismas. Esto produce entornos hiperdegradados, habitados por cuerpos precarizados. No desaparecen los sueños y deseos del mundo del consumo, se realizan por medio de valores de uso monstruosos, copias apocadas de un mundo imposible. Se radicaliza la vulnerabilidad, generando sociedades desarmadas para pelear contra el avance del capital.

Estas son algunas de las marcas de los sujetos que el capitalismo produce en el siglo XXI contra las que hay que luchar para abrir vías de transformación. La emancipación no se dará a través de las formas del sujeto que el capitalismo ha producido, se necesita liberarse de la sujetividad capitalista y producir nuevas formas que no reproduzcan los pilares de la sociedad de la mercancía, que se desprendan del culto al dinero y al trabajo. De otra forma no se podrán sentar las bases de una nueva concepción de la vida y sus sentidos. <

AMERICA LATINA *en movimiento*

Reordenando el continente

#495 mayo 2014 • alainet.org/es/revistas/495

Número coeditado con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, México, que explora las nuevas estrategias de control geopolítico del continente. Versión digital disponible en línea.



La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales

Carlos Fazio

Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación *originaria* descrita por Marx en el capítulo 24 de *El Capital* (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la

economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (*matable*, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de *Los Caballeros Templarios*, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía

Carlos Fazio es escritor, académico de la UNAM y la UACM. Periodista de investigación, colaborador del diario *La Jornada* de México y el semanario *Brecha* de Montevideo.

y seguridad nacional estaban –o deberían estar– bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas–, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadounidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13

oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales. Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).

El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos. ☞

Las armas del autoritarismo

Raúl Ornelas

*“Las armas son herramientas de mal agüero”.
La guerra es un asunto serio; da miedo pensar
que los hombres puedan emprenderla sin dedi-
car la reflexión que requiere.”*
Sun Tzu, El arte de la guerra

Uno de los rasgos más grotescos del estado autoritario que se consolida en México es el recurso generalizado y creciente a las armas. No se trata sólo del aumento de las fuerzas armadas, sino de su modernización y de la compra masiva de tecnologías militares. Ello expresa nítidamente la estrategia elegida por el grupo gobernante para tratar de imponer su proyecto social: abrirse paso con las armas en la mano. Y ello en un país en el que las estadísticas oficiales reconocen que 55 millones de personas están en situación de pobreza, y en el que la estrategia militarista del gobierno federal sólo ha conseguido alimentar la espiral de violencia hasta el punto en que amplias regiones son gobernadas por los grupos criminales.

En este texto presentamos un panorama sobre el aumento de los recursos federales dedicados a la compra de armamentos y de tecnologías de espionaje por parte del gobierno federal.

Un régimen armado hasta los dientes

Entre 2013 y 2016 el gobierno federal ha destinado más de 590 mil millones de pesos (mmp) a los principales organismos y cuerpos armados, siendo la Secretaría de la Defen-

sa Nacional la principal receptora, con 45.6% del total, seguida por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal (22% cada una), la Secretaría de Marina (17%), la Procuraduría General de la República (11%) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional -Cisen- (3.6%). Exceptuando este último, se estima que estos cuerpos cuentan con alrededor de 350 mil elementos, de los cuales 213 477 son empleados de la Secretaría de la Defensa, 54 741 de la Secretaría de Marina y 37 871 de la Policía Federal.¹

Durante el sexenio de Vicente Fox, se destinaron 278 mmp al gasto federal en seguridad y defensa, mientras que la administración Calderón gastó 610 mmp. Si hacemos una extrapolación del gasto hecho entre 2013 y 2016, podemos estimar que los recursos destinados a la guerra por el gobierno de Peña Nieto superarán los 885 mmp al final de su mandato. Otro indicador del “esfuerzo bélico” del país es el peso del gasto en defensa y seguridad en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasa de 0.52% en 2006 a 0.85% en 2012, alcanzando su máximo histórico en 2015 con 0.97%.²

Como en otros aspectos de la vida nacional, el gobierno de Peña Nieto rompió los límites del nacionalismo al abrir el mercado de armamento a los proveedores estadounidenses. Históricamente, se procuraba mantener una relativa diversificación; sin embargo, a partir de la declaración de la guerra contra el narco-

Raúl Ornelas es investigador Titular del IIEC - UNAM, raulob@iiec.unam.mx

1 4to Informe de Gobierno 2015-2016. Anexo estadístico, pp. 46 y ss.

2 Cálculos hechos a partir de los datos del Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016, corregidos con los presupuestos otorgados a la Policía federal de 2014 a 2016.

tráfico se plantea la necesidad de “modernizar” las fuerzas armadas del país. De acuerdo con un reportaje de *The Washington Post*, en 2013 se pactó la primera gran compra con la Embajada de Estados Unidos: 5.5 millones de municiones, valuadas en 6 millones de dólares. Se estima que entre 2013 y 2015, México gastó 3.5 mil millones de dólares (mmd): 1.5 mmd a través del gobierno y 2 mmd con empresas privadas del vecino país.³

De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, entre 2012 y 2016 las importaciones de armamento pesado de México crecieron 184% respecto del periodo 2007-2011, siendo Estados Unidos el principal vendedor, al proveer 56% del total importado.⁴ La misma fuente estima que en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto, se realizaron exportaciones de armas pesadas a México por un valor de 940 millones de dólares, concentradas en la compra de aeronaves (73% del valor total). En particular, se identifica la compra de 114 aeronaves a entidades con sede en Estados Unidos, entre las que destacan 31 helicópteros S-70/UH-60L, los tristemente célebres Black Hawk fabricados por la empresa Sikorsky Aircraft Corporation.⁵

Estos gastos colocan a México como uno de los principales compradores de armamento en América Latina y a sus fuerzas armadas como las segundas más numerosas y con mayor poder de fuego, sólo detrás de Brasil. Los análisis sobre el tema coinciden en señalar que la “modernización” militar emprendida por el

3 Partlow, Joshua, 2015, “What’s behind Mexico’s military buying binge?”, *The Washington Post*, 15 de junio.

4 Fleurant, Aude, et al., 2017, *Trends in international arms transfers*, 2016, SIPRI, febrero <https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf>

5 Ver <http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php> y http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php La estimación corresponde a los costos del armamento y no a su valor comercial.

gobierno mexicano se orienta hacia el control social: las autoridades afirman que las compras de armamento tienen como finalidad combatir al crimen organizado, sin embargo, las fuerzas armadas han realizado innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la desaparición forzada, y masacres como las de Tlatlaya, Ixmiquilpan o Nochixtlán, hechos que muestran su determinación de tratar a la población como el “enemigo interno”.

El espionaje al alza

Como todo régimen autoritario, el mexicano siempre ha tenido un amplio aparato de “vigilancia”, por lo que las recientes revelaciones sobre espionaje contra prácticamente todos los sectores de la sociedad no deberían sorprender. Lo relativamente nuevo es el recurso a la alta tecnología y los grandes negocios públicos y privados que se tejen en torno. En este terreno vemos claramente cómo el grupo gobernante se adhiere a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, realizando fuertes inversiones que benefician al estado estadounidense y a corporaciones privadas.

En 2012, reportes de prensa revelaron la firma de 5 contratos para la adquisición de equipos de telecomunicaciones y programas informáticos de vigilancia y espionaje por un total de 5 mmp. En uno de ellos, fechado en julio de 2011, se consigna la adquisición de la tecnología *Pegaso -Pegasus-* que se “apodera” de los teléfonos celulares y permite extraer la información y monitorear todas las actividades del equipo infectado. Los contratos fueron firmados con una empresa fantasma de nombre *Security Tracking Devices*. Cinco años después, se sabría que esta tecnología es fabricada por la empresa israelí *NSO Group*.

Ya bajo la presidencia de Peña Nieto se han producido dos importantes escándalos de espionaje que ilustran la determinación autoritaria del gobierno federal.

En 2013, la organización canadiense Citizen Lab reveló que las tecnologías *Finfisher* producida por la empresa inglesa *Gamma International*, y *Da Vinci*, producto de la firma italiana *Hacking Team*, fueron usadas para espiar a ciudadanos mexicanos⁶. También fue documentado el uso de los programas de geolocalización *Plint Tracking Locsys* y *Hunter*, y de monitoreo de redes *ProxySG* y *PacketShaper*, vendidas por la empresa estadounidense Blue Coat Systems.

En 2017, gracias a la colaboración de Citizen Lab y organizaciones locales, se reveló que al menos desde 2014 se ha usado el programa *Pegasus* en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos, e incluso contra un menor de edad. Esta tecnología fue adquirida por la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General y el Cisen.⁷

El gobierno mexicano argumenta que estas tecnologías se usan en el combate al crimen organizado y niega en forma categórica que haya autorizado o realizado espionaje. Sin embargo, tanto por los costos millonarios de las compras como por las razones para espiar a ciudadanos, las evidencias apuntan a que estamos frente a una más de las estrategias gubernamentales para eliminar la disidencia y la protesta sociales en México.

El autoritarismo ha avanzado de manera acelerada, mostrando formas articuladas que en otros países de la región apenas comienzan a tomar forma. La compra de armas y el recurso al espionaje generalizado, caracterizan la profundidad de la estrategia del grupo gobernante y sus aliados para consolidar su proyecto de entregar las riquezas del país a los grandes capitales y disciplinar a la población a tal objetivo. A pesar de los altísimos costos humanos y

6 Ver <http://wikileaks.jornada.com.mx/notas/desarrollador-de-finfisher-y-otros-ejecutivos-del-espionaje-cibernetico-activos-en-mexico-revela-wikileaks>

7 Ver Informe Gobierno espía <https://r3d.mx/gobiernoespia/>

sociales de esta estrategia, el mayor drama de nuestra sociedad es que la violencia criminal e institucional se ha generalizado y no parece haber salidas en los marcos del régimen político. La apuesta por las armas ha cerrado las “vías institucionales” a cualquier cambio por pequeño que sea. Por ello, son las luchas de los pueblos, organizaciones y colectivos de distintos horizontes las que están creando alternativas al autoritarismo reinante, teniendo como uno de sus primeros límites, encontrar las formas de desmontar la estrategia de aniquilamiento en curso...

Posdata. Como muestra del descontrol total que vive el país y la inexistencia de instituciones y leyes que normen la acción de los poderes públicos, los días 29 y 30 de agosto de 2017 salió a la luz otro enorme escándalo de espionaje, que tiene como actor principal al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, político que pretende ser candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, y quien habría ordenado y financiado la creación de una extensa red de espionaje, por supuesto ilegal. Entre las revelaciones hechas destacamos tres: el espionaje al presidente Peña Nieto y al secretario de gobernación Osorio Chong, máximas autoridades del régimen; la denuncia pública con presencia en los medios de un exintegrante del CISEN de nombre Rodolfo González Vázquez, que presentó supuestas evidencias del espionaje ilegal, hecho inédito pues en general, los gobernantes y los responsables del espionaje siempre han negado la realización de tales prácticas; finalmente, el detonador de la denuncia fue la posibilidad de que a partir del espionaje contra el empresario Anwar Salomón Briseño pudiese producirse un secuestro o un asesinato. Las armas del autoritarismo son la condición de posibilidad de la guerra de todos contra todos en un México que se desangra aceleradamente... Ver: <https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/hay-420-llamadas-producto-de-espionaje-en-la-lista-hasta-e-pn-y-chong-acusan-a-moreno-valle/> y <https://www.youtube.com/watch?v=NCX1HaNBqps> 

Guerra de despojo territorial y acaparamiento de tierras

Polette Rivero Villaverde

Las disputas por la tierra y el territorio forman parte de los conflictos más antiguos de la humanidad, y al mismo tiempo que ésta, han ido cambiando de tal manera que podemos identificar las formas y métodos de despojo predominantes, así como los sujetos antagónicos que protagonizan estas luchas en cada fase histórica.

Es posible afirmar que en el siglo XXI asistimos a una nueva guerra por el territorio y la tierra. Se visibilizó con la crisis de 2007-2008, cuando de forma masiva comenzaron a difundirse a través de algunos medios y organizaciones independientes, las denuncias de comunidades latinoamericanas y africanas, sobre los despojos que los gobiernos y las empresas estaban llevando a cabo a fin de ocupar sus territorios. A esta “fiebre por las tierras” se le denominó acaparamiento de tierras o land grabbing en inglés.

En breve se entendió que los nuevos despojos territoriales eran más complejos que los de otras etapas históricas. En parte porque los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder, y

se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario. Grandes fondos de capital provenientes de bancos como Goldman Sachs, personajes poderosos como George Soros, ex funcionarios públicos, fundaciones como la de la Universidad Harvard, fondos de pensión de los trabajadores de países como Estados Unidos y Canadá, encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis, y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

Mientras los problemas de hambre se agudizaban para la mayor parte de la población mundial, las corporaciones que dominan el mercado alimentario como Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, entre otras, registraban ganancias récord de hasta 400% más. A su vez, países petroleros pero sin tierras de cultivo, como los Emiratos Árabes, Qatar, etc., y países con una creciente clase media, realizan aún grandes inversiones en tierras periféricas; es el caso de China e India.

Polette Rivero Villaverde es Doctoranda en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante del Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales del IIEc, ambos de la UNAM.

Dimensión de los acaparamientos de tierra

La medición de las transferencias de tierra no es sencilla. Generalmente los interesados en esta sistematización acuden a las notas periodísticas para dar seguimiento, lo que en parte resulta disperso, parcial y a veces poco riguroso. En países como Brasil se cuenta con cifras oficiales de extranjerización de tierras, pero en otros como México los rubros jurídicos no visibilizan la privatización y extranjerización de los territorios. No obstante, retomemos algunos datos para dimensionar el problema.

A inicios de agosto de 2017, Land Matrix, un observatorio que monitorea la compra de tierras desde el año 2000, reportaba que, de un total de 1 345 acuerdos concluidos a nivel mundial, se habían transferido 49 238 484 hectáreas de tierras para cultivos, programas verdes, minería, carreteras, turismo, etc. El acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, lo podemos encontrar en los cinco continentes, pero es un proceso que predomina en la periferia.

De acuerdo con el seguimiento de la organización GRAIN, entre 2006 y 2015, los países de América Latina en los que se encontró acaparamiento de tierras destinado a cultivos alimentarios, abarcaron una superficie de 3 927 450 hectáreas, mediante 59 adquisiciones. Se trata exclusivamente de inversiones extranjeras, donde Brasil encabeza la lista con 2 727 502 hectáreas; seguido por Argentina con 513 116; Paraguay con 208 549; Colombia con 154 660; Uruguay con 144 178; Perú con 80 149; Venezuela con 60 000; Bolivia con 57 845; Jamaica con 30 000; y Belice con 1 600.

El origen de las inversiones extranjeras para compras de tierras en América Latina es muy diverso: Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, India, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Italia, Por-

tugal, entre otros. Pero también se registra un acaparamiento de tierras intrarregional, en donde capitales brasileños y argentinos están a la cabeza. Brasil incluso es uno de los países que acapara tierras junto con Japón en África.

Aunque estas cifras nos dan una idea del problema, cientos de casos no están registrados ni se conocen públicamente. Si a las tierras acaparadas para cultivos alimentarios agregáramos las que se destinan para megaproyectos mineros, carreteros, urbanos, turísticos, de energía (como el fracking y las represas), agrocombustibles, etc., las cifras se elevan considerablemente.

En México, por ejemplo, la mayor parte de los despojos de tierra son para desarrollos turísticos y de minería a cielo abierto; en este último caso, del año 2000 al 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 hectáreas para minería, de acuerdo con Eckart Boege. Otro ejemplo es Brasil, donde sólo retomando 12 contratos registrados por Land Matrix sobre compras de territorios por parte de extranjeros para proyectos mineros, de energía renovable y de conservación en los últimos años, se genera una cifra de 698 344 hectáreas acaparadas.

Los siguientes retos

Desde 2014 los precios de los alimentos y los energéticos bajaron, lo que hizo que la inversión extranjera en tierras destinadas a estos propósitos se desacelerara, no obstante, el despojo territorial continúa. Las preguntas que tenemos que hacernos son por qué y para qué.

En primer lugar, hay que decir que es probable que la acumulación por despojo que caracteriza esta fase histórica llegó para quedarse por un tiempo más largo. La crisis de 2007 puso una alerta a los grandes capitales formados alrededor de la financiarización por el nivel de

vulnerabilidad que tiene este tipo de riqueza; en respuesta han ido generando nuevos mecanismos para continuar mercantilizando la naturaleza, desde el aire con los servicios ambientales, hasta las semillas.

Esto implica que los Estados que compiten en la guerra intercapitalista, así como sus empresas y sus emisarios, los organismos internacionales, están haciendo una fuerte campaña a fin de institucionalizar los despojos territoriales. Desde hace diez años el BM y la FAO se apresuraron a establecer una serie de “principios de responsabilidad” para los inversionistas, a la vez que promovían la compra de tierras, procurando con ello invisibilizar la ilegitimidad y la violencia de estos procesos y crear una imagen “positiva” del despojo. Habrá que estar pendiente sobre la articulación de los nuevos discursos que procuren legitimar ideológicamente esta barbarie.

Otros riesgos son los nuevos mega acuerdos que comienzan a extenderse por el mundo, como el Acuerdo Transpacífico (TPP) que no podemos dar aún por muerto. Con estos nuevos mecanismos se establecen condiciones muy desiguales entre los países centrales y la periferia; se otorgan mayores privilegios y certezas jurídicas, económicas y armadas a las inversiones extranjeras. ¿De qué se les protege? De los pueblos, de su organización y resistencia. Esta nueva institucionalidad colo-

nial internacional debe ser un tema primordial para los movimientos sociales, los académicos y partidos de izquierda.

Entre los nuevos proyectos de despojo territorial ocupan un lugar central los vinculados con el agua. Al estilo de Hubert Humprey, senador del Congreso de Estados Unidos en la década de 1970, quien decía en tono cínico que había escuchado decir que la gente podría volverse dependiente de su país para alimentarse, por lo que sería estupenda la dependencia alimentaria de otros países, hoy algunos de los mayores inversionistas opinan lo mismo con relación al agua. Desde hace pocos años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde se encuentran las reservas de agua. Según la organización Amigos de la Tierra, en 2015 Colombia vivía más de 72 conflictos por la privatización del agua, Brasil 58, Ecuador 48, Argentina 32, Perú 31 y Chile 30.

Finalmente, es preciso que en tanto fase de transición donde el capitalismo no ha acabado por definir un modelo dominante de acumulación, surjan por un lado las preguntas oportunas sobre lo que están haciendo las élites del poder, y por otro lado se tome acción sobre la urgencia de articular un movimiento social más amplio en defensa del territorio y la vida. Se necesita poner freno a las guerras del capitalismo. <<



Entre la violencia y la migración: El plan que no alcanza

Rodrigo Yedra

La injerencia del gobierno de Estados Unidos en América Latina y el Caribe ha sido compleja y problemática a lo largo del siglo XX. El derecho de intervención para garantizar el cumplimiento de la *democracia*, así como mantener la seguridad en la región, han servido como pretextos para ejercer presión diplomática y militar, llegando a imponer sanciones económicas e incluso desplegar fuerzas de ocupación en casi cualquier país latinoamericano y del mundo.

En pleno siglo XXI surge un nuevo andamiaje de planes económicos, iniciativas militares y acuerdos políticos que buscan consolidar nuevamente la presencia hegemónica de Estados Unidos en la región. A decir del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) “la ayuda estadounidense a la región responde directamente a las prioridades políticas de los Estados Unidos, en particular la ampliación de asistencia para Centroamérica”. (CBJ, 2016)

Es en este contexto que surge el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte (PAPTN), propuesto en 2014 ante el Congreso de Estados Unidos por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este Plan, apoyado por el gobierno de Obama y asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como líneas estratégicas desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia,

dinamizar el sector productivo y fortalecer las instituciones.

El antecedente directo de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte se puede ubicar, primero, en el despliegue económico y militar que estableció el gobierno de Bush en 2008 mediante la Iniciativa Mérida. Después, en 2010, el gobierno de Obama lanzó la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Ambas señalaban la importancia de fomentar el desarrollo de los países de la región por medio de inversiones y con ello mejorar la seguridad, desalentar la migración, disminuir la violencia y el tráfico de drogas.

De acuerdo con el WHA, los programas impulsados dieron prioridad a objetivos críticos de seguridad nacional de EEUU, entre ellos prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y humanos y los actos de terrorismo. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca el WHA incluyó algunos lineamientos referidos a los acuerdos comerciales bilaterales, que apoyará siempre y cuando “respeten la soberanía nacional de los Estados Unidos y promuevan la inversión y el empleo en los Estados Unidos.” (CBJ, 2018)

Nuevamente se ponen a la mesa los temas vinculados con la ayuda económica para los países *menos desarrollados*, la capacitación y creación de infraestructuras para fomentar la seguridad económica, así como la prevención de contingencias climáticas y el infaltable apoyo y asesoría militar.

Rodrigo Yedra es miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

La migración como alternativa

La Región del Triángulo Norte (RTN) aporta una gran cantidad de personas que migran, principalmente por la falta de alternativas económicas y la violencia derivada de las agresiones, amenazas, extorsiones o intentos de reclutamiento forzoso de bandas criminales.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de cocaína es la principal actividad ilegal en la RTN, acompañada por la trata, la explotación sexual y el secuestro de migrantes por parte de grupos criminales para exigir rescate. Los asesinatos en la región sumaron 15 mil en 2016, con una tasa de homicidios de 108 en El Salvador, 63 en Honduras y 35 en Guatemala por cada 100 mil habitantes en 2015, convirtiéndola en una de las zonas más violentas del mundo. (UNDOC: 2014)

A partir del 2014 el incremento de menores de edad que intentaron migrar hacia Estados Unidos generó una alerta debido a que se contabilizaron 50,303 niños procedentes de los países del triángulo (PAPTN, 2015). La migración interna es otra realidad en la región, el índice de desplazados internos en Honduras sumó 174,000 entre 2004 y 2014. (ACNUR, 2016).

El número de migrantes indocumentados detenidos en México pasó de 61,334 en 2011 a 152,231 en 2016. De ellos, el 80.7% provenía de los países de la RTN. En el caso de los menores detenidos se contabilizaron 4,129 en 2011 frente a 40,542 en 2016. De este total, el 12.7% eran niños menores de 11 años que viajaban sin un adulto acompañante. (MSF, 2017)

En el ámbito económico las remesas se mantienen como una de las principales fuentes de ingreso familiar en Centroamérica. En el caso de Guatemala representaron el 10% del PIB en 2016, y se prevé que alcanzará los 7,733 millones de dólares (md) en este 2017. Por su

parte, El Salvador recibió 4,576 md en 2016, el 17% de su PIB y Honduras 3,949 md, equivalentes al 6.0% del PIB. Dentro de los primeros 10 países a nivel mundial que reciben remesas desde EU se encuentra México (1), Guatemala (6), El Salvador (8) y Honduras (10). El grado de dependencia que tienen estos países con respecto a las remesas, y la falta de alternativas económicas, mantiene el éxodo anual que sigue en aumento.

La ayuda militar

El presupuesto solicitado por el WHA para el 2018 asciende a 1,1 mil millones de dólares. Dicho presupuesto se subdivide en 5 grupos principales: 460 md para América Central, 85 md para la Iniciativa Mérida, 251 md para el Plan Colombia, 157 md para Haití, 49 md destinados a Perú y 36 md para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).

El presupuesto asignado para Centroamérica se destinará en 2018 principalmente a los programas de Educación y Formación Militar Internacional (IMET), con un monto de 2,310 md, y al Fondo de Apoyo y Desarrollo Económico (ESDF), con 189,500 md. (CBJ, 2018)

Las operaciones militares en la región han aumentado con la presencia de la Fuerza de Tarea Especial de la Marina Aérea del Comando Sur, la cual desde julio pasado ha realizado actividades en la región, entre ellas la construcción de una instalación de Operaciones Militares en Terreno Urbano en Jutiapa, Guatemala; así como el entrenamiento de proyectos de ingeniería y operaciones de seguridad a sus contrapartes de Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador. (Southcom, 2017)

Además, la conformación de estructuras supranacionales sigue un patrón que facilita y justifica la intervención de fuerzas militares, ejemplo de ello es la conformación de la *Fuerza Trinacional contra el crimen organizado*, así como las reuniones de Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) para la coordinación

interinstitucional y el fortalecimiento de las instituciones con los países de Triángulo del Norte. (CENTSEC, 2017)

En contraste, a pesar de los financiamientos dirigidos a la región, la violencia no cesa. Aun cuando Guatemala (22.5%), Honduras (17.3%) y El Salvador (16.3%) recibieron el mayor porcentaje de presupuesto del CARSI entre 2008 y 2012, no ha disminuido la violencia, el índice de asesinatos, ni la migración.

Los proyectos y la ayuda económica

En la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en Miami se relanzó la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte. A pesar de la reducción anunciada por el gobierno de Trump, el BID, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras y el sector privado anunciaron que invertirán 2,500 md en proyectos en energía, transporte, agua y turismo en esos países, algunos de ellos impulsados desde el Fondo Yucatán.¹

Entre las críticas presentadas a la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte por el movimiento social, académicos y ONGs señalan la falta de atención a las causas estructurales que provocan la migración.²

1 Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y los Países del Caribe (Fondo Yucatán). Desde 2012 a 2017, se han aprobado 129.7 millones de dólares para 16 proyectos en 11 países de CA. Entre los proyectos impulsados están la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) pertenecientes al Proyecto Mesoamericano.

2 La falta de claridad sobre el uso de los recursos destinados; la corrupción; mantener la propuesta de desarrollo basada en inversiones en agroindustria, industria extractiva y maquilas promoviendo privilegios fiscales a los inversores; la falta de consulta a la sociedad civil y comunidades afectadas; desarrollar una metodología compartida para trabajar en los municipios más necesitados, los bajos salarios del trabajo formal que contrastan con las ganancias derivadas de trabajo ilegal.

Proponen que las inversiones deben priorizar el mejoramiento de las condiciones de salud, calidad educativa y seguridad en los municipios con mayor población migrante. La falta de respuestas comunes que tomen en cuenta a los distintos sectores involucrados en el problema seguirá promoviendo planes, iniciativas y acuerdos que no logren construir propuestas complementarias que no respondan solo al interés del mercado.

A pesar de las inversiones realizadas y de los planes propuestos, Centroamérica vive uno de sus peores momentos. La violencia desencadenada por el narcotráfico, la apropiación de recursos naturales por parte de empresas y la falta de instituciones capaces de brindar justicia imparcial a las víctimas de la violencia y que logren combatir la corrupción, mantendrán a la Región del Triángulo del Norte en un círculo de violencia que seguirá alimentando su origen. <

Fuentes consultadas

ACNUR (2016) Respuesta regional a la situación del Triángulo Norte de Centroamérica.

Department of State (2017) Congressional Budget Justification, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2018.

UNDOC (2012) Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas.

Médicos sin Fronteras (2017) Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada.

Plan Regional Preparado por El Salvador, Guatemala y Honduras (2015) Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Southcom (2017) SPMAGTF-SC Marines work with Guatemalan counterparts on infrastructure improvement projects.